

Bernie Sanders es la excepción que confirma la regla. Aunque lejos de ser perfecta, su campaña desafió directamente las fracturas políticas establecidas. Al centrarse en “la clase multimillonaria”, se acercó a los abandonados por el neoliberalismo progresista, dirigiéndose a las comunidades que luchan por preservar vidas de “clase media” como víctimas de una “economía manipulada” que merecen respeto y que son capaces de unir fuerzas con otras víctimas, muchas de las cuales nunca tuvieron acceso a trabajos de “clase media”. Al mismo tiempo, Sanders recuperó a un buen número de los que habían gravitado hacia el neoliberalismo progresista. Aunque fue derrotado por Clinton, señaló el camino hacia una potencial fuerza contra-hegemónica: en lugar de la alianza “financiarización-y-emancipación”, nos dejó entrever un nuevo bloque populista y progresista, que combina la emancipación con la protección social.

En mi opinión, la opción de Sanders sigue siendo la única estrategia ganadora y de principios en la era de Trump. A los que ahora se movilizan bajo la bandera de la “resistencia”, sugiero el contraproyecto de “corrección de rumbo”. Mientras que el primero sugiere una réplica de la definición del “nosotros” (progresistas) del neoliberalismo versus el “ellos” (los “deplorables” partidarios de Trump), el segundo rediseña el mapa político, forjando una causa común entre todos aquellos a los que el gobierno está dispuesto a traicionar: no solo los inmigrantes, las feministas y las personas de color que votaron en su contra, sino también los estratos obreros del Cinturón de Óxido y del sur que votaron por él. Contra Brenner, no se trata de disolver la “política de identidad” en “política de clase”. Se trata de identificar claramente las raíces compartidas de las injusticias de clase y estatus en el capitalismo financiero y construir alianzas entre aquellos que deben unirse para luchar contra ellas.

Fuente: *Dissent Magazine*, 27 de enero de 2017. Disponible en: https://www.dissent-magazine.org/online_articles/nancy-fraser-against-progressive-neoliberalism-progressive-populism

Traducción para Sin Permiso: Tatiana Llaguno

El socialismo como radicalización de la democracia

Reseña de Richard Wolff (2012): *Democracy at Work: A Cure for Capitalism*. Chicago: Haymarket Books, 201 pp.

Pablo Scotto Benito

“Los trabajadores han sido esclavos, han sido *siervos*, hoy son *asalariados*; es preciso tratar de hacerlos pasar al estado de *asociados*. No puede alcanzarse este resultado más que por la acción de un poder democrático”

Louis Blanc en el diario *La Réforme*, 1848.

La crisis económica mundial iniciada en EE.UU. en el verano de 2007, cuyos efectos persisten una década después, ha aumentado el número de voces que proponen un tránsito a un sistema económico diferente. Se ha reabierto así un debate otrora robusto, pero que había sido acallado después de 1989 por el triunfalismo capitalista del *there is no alternative* y el fin de la historia. Tras *Capitalism Hits the Fan: The Global Economic Meltdown and What to Do About It* (2010), una compilación de ensayos —escritos de 2005 en adelante— sobre los antecedentes y el desarrollo de la crisis, el economista americano Richard D. Wolff publicó en 2012 *Democracy at Work: A Cure for Capitalism*. En esta obra, Wolff aúna el análisis crítico de la recesión capitalista con la exposición de una alternativa sistémica, basada en la reorganización de los centros de producción. El libro, el más innovador de los escritos

por el autor, ha tenido una importante repercusión en EEUU, aunque no ha sido traducido todavía al español. La obra ha dado lugar a la organización sin ánimo de lucro Democracy at Work (d@w), cuya actividad puede seguirse a través de la página web: www.democracyatwork.info.

La figura de Wolff ha ganado relevancia en los últimos años. Además de seguir publicando escritos de índole académica —*Contending Economic Theories: Neoclassical, Keynesian, and Marxian* (2012) es la última de una larga serie de colaboraciones sobre teoría económica y marxismo con el también economista Stephen Resnick—, Wolff ha multiplicado sus apariciones públicas: su programa semanal de radio, *Economic Update with Richard D. Wolff*, está asociado a 70 emisoras a lo largo de EE.UU., sus apariciones en televisión son frecuentes, escribe regularmente artículos en la prensa y sus charlas en muy diversas sedes pueden encontrarse fácilmente en internet. El economista marxista se ha convertido en una figura pública, reconocida por su peculiar estilo divulgativo, a la par didáctico y vehemente. A este ascenso mediático han contribuido también los recientes cambios en la política estadounidense, y señaladamente el creciente apoyo social cosechado por Bernie Sanders desde mediados de 2015, cuyos antecedentes más inmediatos cabe situar en el movimiento Occupy Wall Street iniciado en 2011. El último libro de Wolff es *Capitalism's Crisis Deepens: Essays on the Global Economic Meltdown* (2016), una recopilación de ensayos —en la línea de su libro de 2010, ya mencionado— en los que el autor pretende combatir la idea de que la crisis es cosa del pasado.

Antes de continuar, conviene hacer una aclaración sobre el sentido del subtítulo de la obra, *A Cure for Capitalism*. Como señala el propio Wolff en la conclusión, la "cura" no consiste en restituir al capitalismo su salud, en sanarlo de una enfermedad (la crisis) que le afectaría de forma transitoria. El libro no es una contribución a las proclamas sobre la necesidad de "refundar el capitalismo", que con mayor o menor seriedad aparecen intermitentemente en el discurso público. Para Wolff, el capitalismo es la enfermedad misma: las crisis periódicas que sufre no son otra cosa que la expresión más evidente de su intrínseca inestabilidad en tanto que sistema económico. De lo que se trata es de encontrar la vacuna contra el mismo, proponiendo un sistema económico alternativo, más saludable, que cumpla realmente con las necesidades de la mayoría de la población.

El libro se divide en tres partes. En la primera, "*Capitalism in Deep Trouble*",

Wolff analiza la actual crisis económica, situándola en el contexto de las crisis recurrentes que siempre han azotado al capitalismo, y comparándola, principalmente, con la Gran Depresión iniciada en 1929. En la segunda parte, titulada "*What Is to Be Done?*", Wolff argumenta que para superar estas crisis no es suficiente con abandonar el capitalismo del *laissez-faire* en favor de un capitalismo con mayor intervención estatal, siendo necesario cambiar la organización interna de las empresas. En la tercera parte, "*Workers' Self-Directed Enterprises as a Cure*", da forma a esta organización alternativa, que consiste en la extensión de las "empresas dirigidas por los propios trabajadores" (en adelante: WSDEs, por sus siglas en inglés, *workers' self-directed enterprises*).

La idea fuerza que articula toda la exposición es el concepto marxiano de plusvalía. El capitalismo se caracteriza porque una masa de trabajadores produce bienes y servicios por un valor mayor a aquel contenido en los salarios que percibe. La diferencia entre el valor de lo producido y el valor de los salarios es la plusvalía, que es apropiada por quienes dan empleo a los trabajadores, los capitalistas. Estos deciden cómo distribuir la plusvalía para asegurar la reproducción de las condiciones que les sitúan en su posición de capitalistas. Esta organización de las empresas es común a las diversas formas de capitalismo que han existido históricamente. En el "capitalismo privado", quienes toman las decisiones son individuos "privados", en el sentido de que no ocupan ningún cargo público. La economía estadounidense actual sería un ejemplo de esta forma de capitalismo. En el "capitalismo de Estado", los empleadores son funcionarios pertenecientes al aparato estatal. La URSS, dejando de lado algunos experimentos temporales y limitados en la época posrevolucionaria, fue un capitalismo de Estado, a pesar de que se describiera a sí misma como socialista. Entre el capitalismo privado y el capitalismo de Estado hay un rango de situaciones intermedias, que Wolff engloba bajo la etiqueta de "capitalismo privado regulado por el Estado", en el cual los funcionarios públicos disponen de diversos mecanismos para controlar la influencia de los capitalistas privados. Se trata, por ejemplo, del capitalismo del *New Deal*.

Procesos internos al propio desarrollo del capitalismo o cambios en el entorno social pueden alterar la reproducción del sistema. Estas perturbaciones son las crisis, que tienen lugar de forma periódica a lo largo de la historia de este sistema económico. Las crisis han provocado oscilaciones

entre las diversas formas de capitalismo. En los EE.UU. de la década de los 30, en respuesta a la Gran Depresión, se produjo un giro de un capitalismo de *laissez-faire* a un capitalismo con importantes dosis de intervencionismo estatal. De 1945 a 1970, el capitalismo con intervención estatal fue la norma, pero desde principios de los 70 el capitalismo privado ha vuelto a ser dominante.

Para analizar la actual crisis económica, Wolff la compara con el crac del 29. Señala que fue el desarrollo del movimiento sindical, junto con el crecimiento de una serie de organizaciones socialistas y comunistas, lo que hizo virar las iniciales políticas centristas de la administración Roosevelt para hacer frente a la recesión. Roosevelt construyó una potente alianza, un genuino *New Deal* entre buena parte de las grandes empresas y los ricos por un lado, y los sindicatos y la izquierda por el otro, y a pesar de la existencia de algunos críticos en ambos lados de la ecuación, la alianza tuvo éxito. En los peores momentos de la crisis, lanzó costosos programas que ayudaron a millones de ciudadanos: fue establecido un sistema de seguridad social que proveyó pensiones públicas a los trabajadores, se puso en marcha un programa de subsidios para asistir a los desempleados y se instauraron programas federales de empleo, que crearon más de doce millones de puestos de trabajo a partir de 1934. El *New Deal* salvó al capitalismo estadounidense de la falta de demanda por parte del sector privado y del creciente conflicto social entre la clase capitalista y un movimiento obrero cada vez mejor organizado.

Después de la Segunda Guerra Mundial se mantuvieron vigentes los pactos de los años 30, pero los capitalistas empezaron a evadir, reducir o rechazar las leyes heredadas del *New Deal* con cada vez mayor frecuencia, al tiempo que la nueva derecha se distanciaba del consenso del pasado y se empleaba a fondo en la "caza de brujas" anticomunista. La década de los 70 supuso el triunfo de esta nueva derecha, iniciándose una nueva fase que llega hasta la actualidad. Wolff da mucha importancia a que en este período tuvo lugar el fin de más de un siglo de subida de los salarios reales en Estados Unidos. Los salarios reales dejaron de subir debido a cambios en ambos lados del mercado laboral. Por un lado, la demanda de fuerza de trabajo cayó debido a la introducción de ordenadores en los sectores industrial y de servicios, así como a la deslocalización fuera de EE.UU. de buena parte de la industria. Por otro lado, la oferta de fuerza de trabajo creció debido a la entrada de dos nuevos grupos de población en el mercado de trabajo: millones de mujeres adultas y una nueva ola de inmigración proveniente, sobre todo, de México y Centroamérica.

Las familias estadounidenses descubrieron que hacer más horas de trabajo pagado, asumiendo los costes extra asociados a ello, no les permitía hacer frente al estancamiento de los salarios reales. Las clases trabajadoras solo pudieron mantener sus niveles de gasto pidiendo prestado. La subida del precio de la vivienda contribuyó, además, a aumentar las deudas hipotecarias. Cuando la Reserva Federal, preocupada por la recesión después del 11 de septiembre de 2001, bajó los tipos de interés de forma brusca, comenzó a crearse la burbuja inmobiliaria. La extensión de crédito barato fue una forma de posponer el problema; cuando las familias no pudieron pagar sus deudas, el sistema explotó.

La primera respuesta del gobierno fue el Troubled Asset Relief Program (TARP), dotado con 700 billones de dólares, destinados a comprar "activos problemáticos" –retirándolos de los balances de las empresas financieras y añadiéndolos a los del gobierno federal– y a hacerse con acciones de importantes empresas productivas, con el objetivo de garantizar su solvencia y mejorar sus condiciones de financiación. Más adelante, la Reserva Federal y otras agencias financieras y monetarias estatales llevaron a cabo una auténtica socialización del sistema bancario, a pesar de que se insistiera en que no se trataba de reemplazar a la banca privada, sino solamente de asistirle. Estas medidas fueron un claro ejemplo de "política económica por goteo" (*trickle-down economics*): llenar abundantemente el recipiente en la cima de la pirámide económica y esperar que el goteo resultante moje a todos los agentes situados debajo, propiciando la recuperación. La realidad fue que las grandes empresas que recibieron esta asistencia no la usaron para volver a prestar a las pequeñas y medianas empresas ni a los ciudadanos, sino únicamente a los prestatarios más grandes y seguros.

¿Cómo se justificó que las grandes empresas y los bancos recibieran cientos de billones de dólares de asistencia, tras décadas de discursos celebrando la iniciativa privada como el motor del crecimiento y la prosperidad, y denunciando al gobierno como la fuente de la ineficiencia económica y los excesos de gasto? La explicación fue que eran *too big to fail*: dejarlas caer hubiera tenido unas consecuencias tan devastadoras para el conjunto de la economía que el gobierno tuvo que salvarlas en nombre del interés general. Ahora bien, como señala Wolff, no se sacaron las consecuencias esperables de este discurso: estas grandes corporaciones deberían haber sido forzadas a dividirse en empresas más pequeñas, para que el futuro colapso de una no

produjera un sobrecoste tan elevado al gobierno, o bien deberían haber sido nacionalizadas y convertidas en entidades más transparentes y controladas.

A diferencia de lo sucedido durante el *New Deal*, este costoso programa se llevó a cabo sin aumentar los impuestos a las grandes fortunas. El motivo hay que ir a buscarlo a los años 70, cuando empezó a ganar fuerza un discurso según el cual los impuestos no consisten en la distribución de riqueza de un grupo social a otro, sino que son barreras burocráticas que impiden la eficiencia de la economía. La idea es que bajando los impuestos, las empresas se expanden y los individuos ricos invierten, generándose así puestos de trabajo. Wolff recuerda que mientras en la década de 1940 los impuestos federales a las empresas recaudaban mucho más que los impuestos a las personas físicas, en la primera década de este siglo los impuestos a las empresas suponían solamente un cuarto de lo obtenido mediante los gravámenes a la ciudadanía. Apunta también que mientras en los 50 y 60 los individuos más ricos de EE.UU. llegaban a tener una tasa impositiva del 91%, en la primera década de este siglo las rentas más elevadas no tributaban en ningún caso por encima del 35%.

El gobierno se encontró ante un dilema. ¿Cómo hacer frente a los gastos derivados de los servicios públicos y del soporte económico a las empresas sin subir los impuestos? La solución fue el déficit público. Cuando el aumento de la deuda se convirtió en un problema para el capitalismo global, las presiones de los acreedores condujeron a la aplicación de políticas de austeridad, que consistieron, básicamente, en recortar los servicios sociales en perjuicio de la población. Como resume Wolff: "los americanos han sufrido desde hace años una crisis económica que no han causado. Han sido testigos de un programa de recuperación que no les ha ayudado. Han escuchado hablar a los arquitectos de dicho programa sobre la necesidad de que «todos» se aprieten el cinturón para pagar sus costes. Después han entendido que ese «todos» se refería solamente a ellos –no a aquellos cuyas actuaciones provocaron la crisis– y que debían aceptar recortes y austeridad justo en el momento en que más urgentemente necesitaban más y mejores servicios públicos" (p. 9).

La respuesta fue, en definitiva, muy diferente a la del *New Deal*. ¿Los motivos? En primer lugar, el debilitamiento del movimiento sindical, la práctica desaparición de las organizaciones socialistas y comunistas y, más generalmente, la disminución de la participación política. En segundo lugar, la creciente dependencia de los partidos Demócrata y Republicano con respecto

a los poderes fácticos. En tercer lugar, la ausencia de un "socialismo real", similar al existente en la URSS en la década de 1930. La conclusión de Wolff es que los impuestos a las grandes fortunas y las regulaciones de la acción empresarial propios de la época del *New Deal* se han revelado medidas reversibles y sin efectos sostenidos en el tiempo. Superar las crisis endémicas requiere cambiar algo más que la forma de capitalismo. Es necesaria una solución diferente, que asegure una distribución genuinamente democrática del poder entre los individuos, tanto en sus centros de trabajo como en sus comunidades políticas.

En la última parte del libro, Wolff elabora una nueva versión de una vieja idea: la producción funciona mejor cuando son los propios productores quienes deciden democráticamente la forma de organizar su trabajo. Los antecedentes de esta propuesta son muchos y variados. Se remontan a los socialistas decimonónicos –pensemos en los "talleres sociales" de Louis Blanc o en la "democracia industrial" de Proudhon– y llegan hasta nuestros días, con teorías como las de Seymour Melman (*workplace democracy*) y David Schweickart (*economic democracy*), o la defensa de las cooperativas hecha por Mario Bunge.

La idea central de las WSDEs vuelve a girar en torno al concepto de plusvalía: el objetivo es reemplazar la actual organización de los centros de trabajo para acabar con la distribución de los excedentes por quienes no intervienen en la producción. Los trabajadores se convertirían en los directores de la empresa, decidiendo qué, cómo y dónde producir, así como la forma de distribución del plusvalor. Más concretamente: por un lado, a cada trabajador se le asignaría, de forma democrática, una tarea concreta (por un determinado período de tiempo), como parte de la división del trabajo existente en su centro de trabajo; por otro lado, cada trabajador tendría la misma capacidad de participación en el diseño, funcionamiento y modificación de dicha división del trabajo y de la distribución de los excedentes producidos. Wolff afirma que, al tomarse estas decisiones de forma democrática, la extensión de las WSDEs permitiría: a) reducir la actual disparidad de salarios entre distintos tipos de trabajadores (sería posible, además, favorecer la rotación de ciertos puestos de trabajo a lo largo del tiempo); b) hacer compatible la innovación tecnológica con el mantenimiento de los puestos de trabajo y c) reducir el impacto ambiental de las actividades productivas.

Tal como sucede en las empresas capitalistas actuales, podemos distinguir dos grandes tipos de puestos de trabajo en las WSDEs: los trabajadores productivos son aquellos directamente implicados en la generación de bienes y servicios, mientras que los trabajadores "facilitadores" son aquellos que proveen a los trabajadores productivos las "condiciones de existencia" necesarias para que estos puedan generar la plusvalía (esto incluye desde los servicios de limpieza hasta los puestos de gestión y mando). Tanto aquellos que producen los bienes como aquellos que proporcionan el soporte necesario para llevar a cabo la producción formarían parte del consejo de administración de la empresa. La teoría de Wolff se enfrenta aquí a un problema: si el objetivo de las WSDEs es acabar con la distribución de la plusvalía por quienes no contribuyen a producirla, ¿entonces los trabajadores facilitadores, que no crean plusvalor, pueden o no participar en decisiones tales como decidir el tamaño del plustrabajo y la forma de distribuirlo? Wolff responde a esta pregunta de forma poco clara: primero afirma que la junta directiva está formada por todos los trabajadores, productivos o no; pero después añade una extraña distinción entre ambos grupos, al afirmar que los "procesos físicos" de apropiación y distribución de la plusvalía deben quedar reservados a los trabajadores productivos (véanse las páginas 129 y 166).

Aquellos que se apropian y distribuyen la plusvalía en las empresas capitalistas son los miembros de la junta directiva o consejo de administración (*board of directors*). Wolff los distingue tanto de los gerentes o miembros del comité ejecutivo (*managers*), que son nombrados por los directivos y se encargan de supervisar el funcionamiento diario de la empresa, como de la junta de accionistas (*shareholders*), que nombra periódicamente a los miembros de la junta directiva. Su tesis es que en el capitalismo actual el verdadero poder de mando no se encuentra tanto en quienes poseen la propiedad de los medios de producción (accionistas) como en quienes tienen el control efectivo de los mismos y se encargan de la distribución de la plusvalía (miembros de la junta directiva). En base a esto, explica las diferencias de las WSDEs con respecto a las *worker-managed enterprises* y las *worker-owned enterprises*, afirmando que solo las primeras acaban de forma efectiva con la explotación. ¿Y qué hay de las cooperativas? ¿No son acaso lo mismo que las WSDEs? Wolff prefiere no emplear este término, debido a su vaguedad, e insiste en que la clave no está en que el trabajo se desarrolle de forma cooperativa —esto ya sucede en las empresas capitalistas—, sino en que la distribución de la plusvalía se realice "cooperativamente" por los propios trabajadores.

Las WSDEs representan una alternativa tanto al "capitalismo privado" como al "capitalismo de Estado", pues acaban con la existencia de un poder dirigente en el interior de las empresas no elegido democráticamente, sea este poder designado por los socios capitalistas o por los funcionarios del Estado. A diferencia de las distintas formas de socialismo y comunismo históricamente existentes, no se trata de nacionalizar la propiedad de los medios de producción y de reemplazar los mercados por la planificación central. El elemento crucial y verdaderamente transformador es la reorganización de los centros de trabajo para eliminar de ellos las relaciones de explotación, acabando con la extracción de los excedentes del trabajo de las manos de quienes los producen.

Esta reorganización de la producción se complementaría con la creación de organizaciones democráticas en las comunidades de residencia, que interactuarían con las WSDEs cuando las decisiones de unas afectaran a las otras, y viceversa. Algunas de las decisiones que deberían ser co-determinadas serían las siguientes: a) qué porcentaje de propiedad privada y socializada sobre los medios de producción sería mejor; b) qué combinación de mercados y planificación sería preferible como medio de distribución de recursos y productos; c) qué tipo de democracia, representativa o directa, debería existir tanto en los centros de trabajo como en las comunidades políticas.

Para conseguir apoyos en favor de la creación y desarrollo de las WSDEs, serán necesarios, al menos: a) un programa estatal de financiación y soporte de nuevas WSDEs (centrado, quizás, en los desempleados); b) la extensión de programas asistenciales a las pequeñas empresas existentes que proporcione a los trabajadores la libertad de elegir entre formar parte de las empresas capitalistas jerárquicas tradicionales y las nacientes WSDEs; c) alianzas con el cooperativismo y los sindicatos; d) avances en la lucha por la hegemonía cultural; e) incorporación de la democracia en el trabajo como un objetivo central del programa de algún partido político ya existente o de nueva creación.

Finalizaré esta reseña señalando lo que creo que son tres limitaciones del libro de Wolff: la primera afecta únicamente a la forma, la segunda tiene que ver con la finalidad política que el autor atribuye a la obra y la tercera se refiere, esta sí, al análisis teórico propiamente dicho. Vayamos con la pri-

mera. Como señala Angelo Letizia en su reseña del libro (en *Interstitial Journal*, 2013), Wolff no cita otros trabajos a lo largo del texto ni incluye una lista final de referencias. Esta ausencia de citas no es un problema, señala Letizia, cuando Wolff hace su propuesta de las WSDEs, pero el análisis de las crisis del capitalismo se hubiera visto enriquecido por las mismas. Creo que el estilo ameno de Wolff –ensayístico, no puramente académico– es una virtud de la obra, y la buena acogida que ha tenido así lo demuestra, pero también que esto no debería estar reñido con una mayor explicitación de las fuentes empleadas.

El segundo comentario no es meramente formal, sino sustantivo, pero no se refiere tanto a las ideas que se defienden en la obra como a la puesta en práctica de las mismas, a la pregunta sobre el *qué hacer*. Como señala Josep Fontana en su conferencia “¿Por qué nos conviene estudiar la Revolución rusa?” –pronunciada en 2015 en el acto de presentación de la Comisión del Centenario de dicha revolución y publicada posteriormente en Sin Permiso¹–, Wolff “olvida un aspecto que Lenin tenía suficientemente en cuenta: que a fin de abolir la explotación lo primero que hace falta es haber despojado del poder político a los que resultarían perjudicados con este cambio”. En la misma línea, Angelo Letizia señala que Wolff, al abordar la cuestión de cómo podrían emerger las WSDEs en una economía capitalista, no considera el rol que jugarían los lobbies y otros grupos de interés en el bloqueo de dicha alternativa. Evidentemente, no se puede hablar de todo en un solo libro y Wolff señala en diversas ocasiones la dificultad de implementación de las WSDEs, distinguiendo además la tarea de clarificación teórica de las mismas de su establecimiento práctico concreto, que debe hacerse atendiendo a las siempre cambiantes circunstancias del momento (y que no será fácil ni rápido). Pero si aun así hay algo de criticable creo que es lo siguiente: cuando, en el último capítulo del libro, Wolff hace una aproximación general a la forma de implementación de las WSDEs, no menciona la relación que guarda el mundo del trabajo con dos dimensiones económicas clave, como son la configuración de los mercados financieros y el nivel de concentración empresarial.

Se trata de dos aspectos que condicionan sobremanera toda estrategia política de transformación social. La pregunta es ineludible: ¿qué forma de embridaje político de los grandes poderes globales habría de acompañar, en la actualidad, a la formación y desarrollo de las WSDEs? El intento por responderla nos lleva a la tercera observación.

1. N. del E.: Josep Fontana, “¿Por qué nos conviene estudiar la Revolución rusa?”, *SinPermiso*, 15. También accesible en línea en *Sin Permiso*, 29 de febrero de 2015: <http://www.sinpermiso.info/textos/por-qu-nos-conviene-estudiar-la-revolucion-rusa>.

Esta se refiere a dos aspectos distintos aunque relacionados. Por un lado, el excelente análisis de la actual crisis y de sus antecedentes, así como la acertada comparación con el crac del 29, no vienen acompañados de un examen equivalente del período de posguerra. Sería relevante haber abordado el asunto, pues, como señala Antoni Domènech en su contribución a *¿Tiene porvenir el socialismo?* (2014)², el consenso de 1945 puede ser entendido, en lo que se refiere al mundo de la empresa, como una renuncia de las clases trabajadoras a la democracia en el puesto de trabajo, a cambio del reconocimiento de derechos civiles básicos en ese puesto de trabajo (expresión, reunión, asociación), de la capacidad jurídica para negociar (a través de los sindicatos) y aumentos del salario real en función de los aumentos de productividad. Ese fue el sentido del Tratado de Detroit (1950) entre las grandes compañías automovilísticas y los principales sindicatos estadounidenses. Esta nueva configuración del mundo del trabajo (y el nuevo papel de los sindicatos a él asociado), junto con otras medidas, como la regulación de los mercados financieros en los acuerdos de Bretton Woods, tuvieron consecuencias socioeconómicas positivas, llevando al capitalismo global al período de mayor estabilidad de su historia. Pero el acuerdo tuvo también sus puntos débiles. La renuncia a la democracia industrial supuso el mantenimiento del poder arbitrario del patrón: si bien no era ya un “monarca absoluto”, como en la empresa capitalista decimonónica, seguía siendo un “monarca constitucional” con pocas limitaciones en el ejercicio de su voluntad. Además, explica Domènech, permanecieron inalterados los grandes monopolios industriales. Cuando se inició la contrarreforma del capitalismo en la década de los 70, la batalla tuvo lugar en cada uno de los tres frentes señalados: reliberalización de los mercados financieros, desconstitucionalización de la empresa capitalista y aumento de los monopolios, auspiciado por la privatización de grandes empresas públicas.

Todo esto viene a cuento del segundo aspecto que quería resaltar. La tesis de Wolff de que en el capitalismo actual el grupo que dirige de forma efectiva las empresas (decidiendo, entre otras cosas, la forma de distribución de la plusvalía) gana cada vez más relevancia, en detrimento de la clase propietaria, es una idea sugerente y,

2. N. del E.: Antoni Domènech, “Socialismo: ¿de dónde vino? ¿Qué quiso? ¿Qué logró? ¿Qué puede seguir queriendo y logrando?”. En Mario Bunge y Carlos Gabetta (comps.), *¿Tiene porvenir el socialismo?*, Buenos Aires, Eudeba, 2014.

creo, sustancialmente cierta. De todas formas, parece difícil disociar, como a veces parece hacer Wolff, la propiedad de los medios de producción y la dirección efectiva de las empresas. A pesar de que Wolff seguramente tenga razón en que el objetivo no debe ser tanto acabar con la propiedad privada de los medios de producción como conseguir que los trabajadores dirijan de forma efectiva la empresa, no es menos cierto que la reducción del carácter crecientemente monopolístico de los medios de producción, así como un mayor control de los flujos globales de capital, parecen pasos que necesariamente habrían de acompañar a la lucha por la democracia en el trabajo.

En conclusión: la gran virtud del libro de Wolff es que aborda un tema clásico del socialismo interpelando a todos aquellos que se comprometen con la defensa de la democracia. Si la democracia es, como pocos se atreven a negar, un valor central en la configuración de las sociedades contemporáneas, entonces parece poco razonable que no haya democracia allí donde los adultos pasan la mayor parte de su tiempo, que es en el trabajo. En un momento en que la palabra 'democracia' está escrita en la bandera de los partidos liberales y en que diversos partidos de extrema derecha ganan fuerza a través de elecciones democráticas, es necesario repensar, actualizar y radicalizar la democracia, que puede ser considerada, como dejó dicho Domènech, la idea más revolucionaria de la historia contemporánea.

La viabilidad económica de la Renta Básica

Reseña de Jordi Arcarons, Lluís Torrens y Daniel Raventós (2017): *Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 168 pp.

Lucía Baratech

Después de varios años de ininterrumpido torrente de artículos y publicaciones defendiendo la viabilidad económica de la Renta Básica para el Reino de España, los autores Daniel Raventós, Jordi Arcarons y Lluís Torrens finalmente sacan a la luz el libro definitivo que fundamenta, desde varios ángulos diferentes, una de sus principales afirmaciones: es posible financiar un ingreso monetario a toda la población española que garantice la eliminación de la pobreza material sin llevar a la quiebra el Estado del bienestar. De todas las críticas a las que se ha enfrentado la Renta Básica Universal (RBU) desde su irrupción en el debate público hace casi dos décadas, la imposibilidad de su financiación ha sido uno de los argumentos a los que más fuertemente se han aferrado sus detractores. Una RBU suficiente para acabar con la pobreza relativa tendría que ser equivalente a unos 622,5€ al mes¹, cuantía establecida según los cálculos

1. Tal y como se expresa en diferentes momentos del libro, la eliminación de la pobreza relativa es un hecho que ocurre en el momento que toda la población tiene ingresos superiores al 60% de la mediana de ingresos. Este hecho tendría lugar en el momento de aplicación de una RB al 60% o más de la mediana de ingresos de la población.